

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1492

28 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *Toledo López*

(Por petición de la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman))

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Vivienda y Bienestar Social

LEY

Para crear la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía (Ombudsman) y el cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía (Ombudsman), con capacidad jurídica independiente y poderes investigativos y fiscalizadores, disponer su organización, funcionamiento, autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal establecer sus deberes, facultades y los procedimientos para atender, tramitar y solucionar reclamaciones, quejas, agravios y querellas, fijar penalidades, derogar la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, que crea la Oficina del Procurador del Ciudadano; y para transferir sus deberes y responsabilidades, fondos, equipo, expedientes y personal a la nueva Oficina.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como la Ley de la Oficina del Procurador del Ciudadano, se creó hace cuarenta y nueve años, con el propósito de fiscalizar y promover la optimización de los procedimientos administrativos gubernamentales, a los fines de evitar su burocratización; proteger los intereses y los derechos humanos civiles, o aquellos que por legislación se concedan a la ciudadanía, e impedir que puedan ser perjudicados o ignorados. Todo ello con la intención de fomentar y mantener la confianza del pueblo en su Gobierno.

Aunque a partir de la aprobación de la Ley Núm. 134, *supra*, se han logrado avances en este sentido, lo cierto es que todavía persiste en la ciudadanía cierto grado de insatisfacción y desconfianza en cuanto a los servicios que ofrecen las Agencias del Gobierno.

Por otro lado, durante este tiempo y debido a los avances científicos, tecnológicos y nuevas tendencias sociales que ha experimentado, vertiginosamente, la sociedad, se han generado enormes cambios en la forma de interacción entre la ciudadanía y el componente gubernamental. Ejemplos de estas nuevas tendencias son el uso e integración de la tecnología y el internet a la gestión gubernamental, y la proliferación de Organizaciones No Gubernamentales Sin Fines de Lucro (ONGs, por sus siglas en español) para brindar servicios a la ciudadanía, que antes eran ofrecidos por el Gobierno, mediante la utilización de fondos públicos asignados para tales fines. Otro ejemplo son los acuerdos o contratos de Alianzas Público-Privadas entre el Gobierno y entidades privadas con fines de lucro para el ofrecimiento de servicios directos o indirectos que históricamente habían sido ofrecidos por el componente gubernamental.

En definitiva, estamos ante una sociedad más sensible y exigente que en antaño, en cuanto al ejercicio y reclamo de sus derechos e intereses; y a la respuesta que ofrece el Gobierno a estos reclamos.

Todo lo anterior hace necesario que se provean nuevas herramientas, mecanismos y enfoques que le permitan al pueblo tener mayor confianza en su Gobierno y en sus instituciones democráticas.

La razón para la creación de esta Ley es, precisamente, aumentar y mantener la confianza del pueblo en su Gobierno e instituciones democráticas, mediante la investigación y la fiscalización de los procedimientos administrativos de las Agencias y de los servicios que estas ofrecen a la ciudadanía. El objetivo es garantizarle a la ciudadanía el derecho a recibir, por parte de las Agencias, servicios públicos de calidad y excelencia.

Para lograr este objetivo esta nueva Ley establece una política pública clara y definida, de lo cual carecía la Ley Núm. 134, *supra*. Esta política pública incluye la creación de la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía con personalidad jurídica independiente y capacidad para demandar y ser demandada. También tendrá funciones investigativas, fiscalizadoras, remediales y educativas, entre otras.

La Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía estará facultada para actuar en representación de la ciudadanía o por iniciativa propia, en la defensa de los derechos del pueblo. La Oficina procurará y garantizará que la ciudadanía reciba servicios a tenor con los derechos reconocidos por las leyes y reglamentos aplicables y que los procedimientos administrativos sean accesibles, eficientes, justos, económicos, confiables, simples, reduciendo el trámite burocrático; y no discriminatorios.

En cuanto a la autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal de la que gozará la Procuraduría de la Ciudadanía, la Asamblea Legislativa, hace algún tiempo, dispuso en el Artículo (3) de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, que la Oficina del Procurador del Ciudadano, creada por la Ley Núm. 134, *supra*, tendría autonomía fiscal. Sin embargo, y como cuestión de hecho, esta autonomía nunca le fue reconocida por las Agencias y autoridades concernientes.

Con el propósito de aclarar y corregir esta omisión, en esta Ley se establece, con claridad, que la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía gozará, a los fines de cumplir con su encomienda, de la más plena autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal; que le permita ejercer la custodia y control de fondos y propiedad, como es el caso de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

A los fines de procurar una mejor comunicación con las Agencias, una mayor efectividad y rapidez en la atención de las reclamaciones, querellas o asuntos planteados por los ciudadanos(as) ante la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía, esta Ley provee para que el Director(a) o Ejecutivo(a) Principal de la Agencia designe un(a) funcionario(a) de su confianza y de jerarquía dentro de la estructura organizacional, con suficiente autoridad decisional para representarla, colaborar en la coordinación con el

resto de los (las) funcionarios(as) de la Agencia cuando sea necesario, y poder llegar a acuerdos que la obliguen, en los casos que refiera a su atención la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía. Este funcionario(a) será conocido como “el (la) Facilitador(a)” y su función, entre otras, será servir como enlace, colaborador(a) y facilitador(a). El propósito es establecer una comunicación directa y efectiva con la Agencia concernida de tal forma que los casos de la ciudadanía se atiendan y resuelvan con rapidez y eficiencia.

En aras de promover una cultura de calidad y excelencia en el ofrecimiento de los servicios gubernamentales, mediante esta Ley, entre otras medidas, se crea un mecanismo de sanción o penalidad presupuestaria a las Agencias que reiteradamente incumplan con las recomendaciones y señalamientos de la Oficina de la Procuraduría, sin violentar el principio constitucional de separación de poderes. Este mecanismo consiste en una reducción del presupuesto de la Agencia, a la total discreción del Gobernador, por el incumplimiento reiterado de esta a las recomendaciones de el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía. La reducción del presupuesto que imponga el Gobernador no se aplicará en el presupuesto vigente de la Agencia.

Esta Ley también establece un procedimiento administrativo por etapas, coherente, claro y efectivo que incluye términos para atender, procesar y solucionar los casos de querellas, quejas, agravios y reclamaciones que presente la ciudadanía cuando aleguen cualquier acción u omisión por parte de las Agencias que les violen los derechos que le reconocen la Constitución de Puerto Rico, las leyes y los reglamentos en vigor. El propósito de este procedimiento administrativo es que el (la) ciudadano(a) conozca y esté informado, en todo momento, del trámite y procedimiento que conlleva su caso.

Como mencionado anteriormente, en estos tiempos, las ONGs han venido a sustituir, en varias instancias, a las Agencias del Gobierno, en el ofrecimiento de servicios a la ciudadanía, y en muchos casos, reciben fondos públicos estatales y/o federales para realizar esa labor. Igualmente, las entidades o corporaciones con acuerdos de Alianzas Público-Privadas. No podemos hacer caso omiso a esta realidad. Por lo tanto, esta Ley

amplía la jurisdicción de la Oficina del Ombudsman para investigar, procesar y resolver reclamaciones y querellas que surjan de actos y omisiones de las entidades o corporaciones con acuerdos de Alianzas Publico- Privadas o de las ONGs al ofrecer sus servicios en violación a los derechos de el (la) ciudadano(a) o que estos le sean negados injusta o discriminatoriamente. El mecanismo discrecional del Gobernador de reducir el presupuesto, dispuesto como penalidad para las Agencias, según antes mencionado, no les será de aplicación a la ONGs.

Por otro lado, esta Ley reconoce, flexibiliza y amplía la facultad del (de la) Procurador(a) de la Ciudadanía para informar con libertad y denunciar públicamente las acciones y omisiones administrativas que incumplan con los principios y parámetros expresados en esta Ley y en la política pública que la inspira.

Finalmente, la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía procurará el fiel cumplimiento con las disposiciones de esta Ley y la política pública en ella establecida y realizará esfuerzos para prevenir y corregir violaciones a los derechos de la ciudadanía y a los principios de sana administración. El objetivo es que toda persona reciba servicios de forma justa, equitativa, efectiva, sin dilaciones innecesarias y conforme al total reconocimiento de sus derechos; de tal forma que se garantice la plena confianza del pueblo en su Gobierno y en sus instituciones democráticas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 I. TITULO

2 ARTÍCULO 1. TITULO DE LA LEY

3 Esta Ley se conocerá como la “Ley de la Procuraduría de la Ciudadanía de Puerto
4 Rico”.

5 II. DEFINICIONES

6 ARTÍCULO 2. SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS

1 Para propósitos de esta Ley los siguientes términos tendrán el significado que
2 se dispone a continuación:

3 (1) Acto Administrativo: Significa cualquier acción u omisión, decisión,
4 recomendación, práctica o procedimiento de una Agencia.

5 (2) Agencia: Significa cualquier departamento, junta, comisión,
6 división, negociado, oficina, corporación pública o institución
7 gubernamental de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico;
8 incluye cualquier persona, corporación, sociedad, cooperativa,
9 asociación, negocio o entidad con fines de lucro que esté realizando
10 alguna labor o gestión de naturaleza pública, que reciba fondos estatales
11 y/o federales para ofrecer servicios directos o indirectos a la ciudadanía,
12 en virtud de un Acuerdo o Contrato y/o Alianza Público-Privada con el
13 Gobierno de Puerto Rico y/o alguna Corporación Pública. Incluye,
14 también, cualquiera de sus funcionarios, empleados(as) o sus miembros
15 que actúen o aparenten actuar en el desempeño de sus deberes oficiales.

16 Este término no incluye:

17 (a) La Oficina del Gobernador.

18 (b) La Asamblea Legislativa.

19 (c) El Poder Judicial.

20 (b) Los Registradores de la Propiedad en cuanto a las funciones
21 de calificación de documentos públicos.

22 (c) La Universidad de Puerto Rico.

- (d) La Oficina del Inspector General.
- (e) La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
- (f) La Comisión Estatal de Elecciones.
- (g) La Oficina de Ética Gubernamental.
- (h) La Oficina del (de la) Contralor Electoral.
- (i) La Oficina del (de la) Contralor.
- (j) Los Municipios de Puerto Rico.

(3) Audiencia Pública: Se refiere a sesiones o audiencias públicas que la Oficina llevará a cabo, sobre los servicios que ofrecen las Agencias a la ciudadanía y otros asuntos relacionados.

(4) Casos: Se refiere a la atención que ofrecen los funcionarios(as) y/o investigadores(as) o empleados(as) de la Oficina a las reclamaciones planteadas por la ciudadanía, que constituyan una “Orientación”, “Coordinación”, “Intervención Especial”, o “Querella”.

(5) Ciudadanía: Se refiere para efectos de esta Ley, a las personas naturales, sin distinción de género, edad, raza, color de piel, origen, condición social o económica, creencias religiosas, ideas o afiliación política, ubicación geográfica y capacidad física. Incluye las personas jurídicas según el término se define por ley.

(6) Coordinación: Se refiere a la gestión que realiza un funcionario(a), investigador(a) o empleado(a) de la Oficina en favor de la ciudadanía, ante un organismo gubernamental público, privado u ONG, sobre el

1 cual se carece de jurisdicción, con el propósito de procurar que se
2 ofrezca un servicio o ejecute alguna acción afirmativa para su beneficio.

3 (7) Director(a) de Servicios Institucionales: Se refiere a el(la)
4 funcionario(a) que supervisa los procesos administrativos y
5 operacionales de los servicios de investigación y atención de los casos
6 que radican los(as) ciudadanos(as), y las actividades que se desarrollan
7 en las Oficinas Regionales, inclusive la evaluación de los informes de
8 los(as) Gerentes Regionales y los expedientes de las querellas, entre
9 otras funciones.

10 (8) Ejecutivo(a) Principal: Se refiere a el(la) Secretario(a) del Gabinete
11 Constitucional del Gobernador(a), Director(a), Jefe(a) y/o Autoridad
12 Nominadora de una Agencia.

13 (9) Evidencia: Es aquella que hace la ocurrencia de un hecho, más
14 probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye
15 la evidencia que sirva para impugnar o sostener la credibilidad de una
16 persona o testigo. La evidencia no se limitará a prueba: documental,
17 testifical, en forma de video o video magnetofónico, y científica.

18 (10) Facilitador(a): Se refiere a el(la) funcionario(a) designado(a), por
19 el(la) Ejecutivo(a) Principal de la Agencia, quien deberá ocupar una
20 posición de confianza y/o de jerarquía dentro del esquema
21 organizacional de la Agencia, y poseer autoridad decisional para
22 representar y llegar a acuerdos que obliguen a la Agencia concernida.

1 Este(a) funcionario(a) servirá como enlace, colaborador(a) y
2 facilitador(a) en los casos que le refiera a su atención la Oficina de la
3 Procuraduría de la Ciudadanía.

4 (11) Funcionarios(as): Se refiere al personal del Gobierno de Puerto Rico
5 que labora en la Oficina o en una Agencia, según el contexto en que se
6 utilice el término, en el texto de esta Ley.

7 (12) Funcionario(a) Autorizado(a): Funcionario(a) de la Oficina de el(la)
8 Procurador(a) de la Ciudadanía designado o autorizado por este(a) para
9 realizar una función, gestión o encomienda relacionada con esta Ley.

10 (13) Funcionarios(as) de la Agencia: Se refiere a los(las) funcionarios(as)
11 públicos(as) con conocimiento de los hechos que motivan la querella y
12 con suficiente autoridad para representarla y llegar a acuerdos que la
13 vinculen con éstos.

14 (14) Gerente Regional: Se Refiere a el(la) funcionario(a) de la Oficina,
15 encargado(a) de dirigir las Oficinas Regionales, supervisar los
16 empleados(as), funcionarios(as), investigadores(as) bajo su cargo y
17 realizar el Informe de el(la) Gerente Regional y otros asuntos
18 relacionados.

19 (15) Informe Anual: Se refiere al Informe Anual escrito que presentará
20 la Oficina a la Asamblea Legislativa y a el(la) Gobernador(a) sobre sus
21 actividades, operaciones, logros y situación fiscal, junto con las

recomendaciones que estime necesarias para la continua y eficaz protección de los derechos de la ciudadanía.

(16) Informe de el(la) Gerente Regional: Se refiere al Informe que realizará el(la) Gerente Regional, luego de celebrada la Vista Administrativa, informando sobre todos los esfuerzos realizados para procurar la solución de la querella sin que se haya resuelto la misma.

(17) Informe de Investigación Especial: Se refiere al Informe producto de las Investigaciones Especiales.

(18) Intervención Especial: Es una acción inmediata por parte de el(la) Procurador(a) para atender e intervenir en una situación que constituya una amenaza o riesgo para la seguridad, la salud y/o el bienestar general de la ciudadanía.

(19) Investigaciones Especiales: Se refiere a las investigaciones que cuando lo estime pertinente, realizará el (la) Procurador(a), por iniciativa propia y sin que medie una querella específica de uno(a) o más ciudadanos(as), cuando a su juicio entienda que alguna Agencia está incurriendo o podría incurrir en acciones u omisiones administrativas que perjudiquen o podrían perjudicar los derechos y/o los servicios a la ciudadanía; y que sean contraídas a lo establecido en esta Ley.

(20) Investigador(a): Se refiere a el(la) funcionario(a) que realiza una investigación o pesquisa sobre un asunto o caso.

1 (21) Junta de Subastas: Se refiere al organismo administrativo encargado
2 de realizar las compras de materiales, productos y servicios para el
3 funcionamiento de la Oficina, según dispuesto por reglamento.

4 (22) Oficial Examinador(a) Independiente: Se refiere a la persona
5 designada y/o contratada por el(la) Procurador(a), discrecionalmente,
6 para presidir y llevar a cabo los procedimientos en la Vista Ejecutiva que
7 se celebre. Podrá fungir como Oficial Examinador(a) Independiente
8 un(a) abogado(a) y/o un(a) funcionario(a) de la Oficina expresamente
9 designado(a) por el(la) Procurador(a).

10 (23) Oficina o Procuraduría: Se refiere a la Oficina de la Procuraduría de
11 la Ciudadanía, creada en virtud de esta Ley.

12 (24) "Ombudsman": Significará el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía.
13 Este término o palabra es de origen alemán, adoptada por el idioma
14 sueco y no se refiere a ningún género específico.

15 (25) ONG: Significa para efectos de esta Ley, organización no
16 gubernamental, asociación, organización, instituto o persona natural o
17 jurídica, sin fines de lucro, que preste, brinde, o rinda alguna labor,
18 servicio o gestión de naturaleza pública y que sus fondos provengan de
19 fuentes estatales o federales, con el propósito de que se ofrezcan servicios
20 a la ciudadanía.

21 (26) Orientación: Se refiere a una contestación o respuesta a el(la)
22 ciudadano(a) en cuanto a los procedimientos de una Agencia y la

1 reglamentación aplicable, al ofrecer sus servicios o ejecutar sus
2 funciones; y los derechos que le asisten a este(a), si alguno. En estos
3 casos, la Oficina tiene jurisdicción sobre la Agencia, pero el(la)
4 ciudadano(a) no ha iniciado o no ha seguido el procedimiento ante la
5 Agencia o lo ha hecho incorrectamente.

6 (27) Orden de Mostrar Causa: Se refiere a la Orden que,
7 discrecionalmente, podrá emitir el(la) Procurador(a) para que la Agencia
8 querellada muestre causa por lo cual no se debe resolver la querella
9 dentro del término de tiempo que se disponga en la Orden, conforme a
10 la recomendación de el(la) Gerente Regional u otro(a) funcionario(a) de
11 la Oficina expresada en el Informe correspondiente.

12 (28) Persona: Significa, la persona natural o jurídica, según estos términos
13 están definidos en la ley

14 (29) Procurador(a) Auxiliar: Se refiere a el(la) funcionario(a) que el(la)
15 Procurador(a) de la Ciudadanía podrá nombrar y delegar en este(a)
16 cuales quiera de sus funciones y facultades, según dispuestas en esta Ley,
17 excepto la de nombrar personal y adoptar reglamentos. Realizará las
18 funciones establecidas en la Ley o Reglamento; y todas aquellas que le
19 sean delegadas por el(la) Ombudsman.

20 (30) Procurador(a) de la Ciudadanía: Es el(la) Procurador(a) de la
21 Ciudadanía del Gobierno de Puerto Rico, cargo que se crea en virtud de
22 esta Ley.

1 (31) Procurador(a) Especializado(a): Es el(la) funcionario(a) que
2 nombrará el(la) Ombudsman para atender reclamaciones,
3 investigaciones especiales, querellas y/o otros asuntos que surjan en
4 áreas específicas y especializadas de la gestión pública o en virtud de una
5 ley que lo requiera.

6 (32) Procurador(a) Especializado(a) de Pequeños Negocios: Es el(la)
7 funcionario(a) que nombrará el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía para
8 atender las reclamaciones o querellas que surjan en las áreas referidas en
9 la “Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria Para el Pequeño
10 Negocio” Ley Núm. 454 -2000, según enmendada.

11 (33) Procurador Especializado(a) del Transporte Público: Es el(la)
12 funcionario(a) que nombrará el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía para
13 atender las reclamaciones o querellas que surjan en las áreas de
14 transporte público, incluyendo, sin limitarse a lo dispuesto en la “Ley
15 Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada; así como cualquier
16 otra ley que se relacione con el transporte público mediante paga.

17 (34) Procurador Especializado(a) de Sistema de Seguridad de Bancos de
18 Información del Gobierno: Es el(la) funcionario(a) que nombrará el(a)
19 Procurador(a) de la Ciudadanía para atender las reclamaciones o
20 querellas que surjan como consecuencia de cualquier violación o
21 irregularidad en los sistemas de seguridad de los bancos de datos en una

1 Agencia o corporación pública, conforme se establece en la Ley Núm 97-
2 2008.

3 (35) Proyecto de Acción Remediativa: Se refiere al Plan de Trabajo que
4 deberá preparar y someter a la Oficina el(la) Ejecutivo(a) Principal de la
5 Agencia investigada, donde especificará las medidas correctivas que ha
6 adoptado o adoptará para cumplir con las recomendaciones contenidas
7 en el Informe Final de la Investigación Especial.

8 (36) Querella: Significa reclamaciones y quejas de la ciudadanía sobre
9 los actos u omisiones de las Agencias que afecten y/o perjudiquen a la
10 ciudadanía y sean contrarias a lo establecido en esta Ley. Igualmente, el
11 (la) Procurador(a) de la Ciudadanía podrá presentar querellas, motu
12 proprio cuando lo entienda pertinente y/o necesario, relacionadas con
13 actuaciones u omisiones administrativas que afecten a la ciudadanía y
14 sean contrarias a lo establecido en esta Ley.

15 (37) Querella Ejecutiva: Se refiere a una querella radicada motu proprio
16 por el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía.

17 (38) Reglas de Procedimiento Civil: Se refiere a las Reglas de
18 Procedimiento Civil de 2010, según enmendadas.

19 (39) Requerimiento Inicial: Se refiere a la notificación que hace el(la)
20 investigador(a) o el(la) funcionario(a) autorizado(a) a la Agencia
21 querellada, solicitándole información o que se corrija la situación que
22 motiva la querella.

1 (40) Resolución Final: Se refiere a la determinación final que emite el (la)
2 Procurador(a) adjudicando una recomendación sobre la solución final de
3 la querella ante su consideración.

4 (41) Resolución “u” Orden: Se refiere a determinaciones, emitidas por
5 el(la) Procurador(a) en cualquier procedimiento administrativo de la
6 Oficina.

7 (42) Reunión(es) Ejecutiva(as): Se refiere a la(s) reunión(es) que el(la)
8 Procurador(a) o su representante autorizado(a) podrá realizar, de
9 entenderlo pertinente y conveniente, con los(as) funcionarios(as) de la
10 Agencia querellada, a los fines de resolver la querella o llegar a algún
11 acuerdo satisfactorio sobre la misma.

12 (43) Reunión(es) Informativa(s): Reunión(es) entre el(la) Investigador(a)
13 o el(la) funcionario(a) autorizado(a) y los(las) funcionarios(as) de la
14 Agencia, para indagar sobre los hechos de la querella e informar cuáles
15 son sus hallazgos en la investigación, hasta el momento, su
16 recomendación con respecto a la solución de la querella, y si es posible,
17 en esta etapa, formalizar acuerdos para lograr una solución de la misma.

18 (44) Sanciones Económicas Presupuestarias: Se refiere a la facultad de
19 el(la) Procurador(a) de recomendarle a el(la) Gobernador(a) para que
20 este(a), discrecionalmente, reduzca prospectivamente (no del
21 Presupuesto vigente) el presupuesto de una Agencia querellada; que ha

incumplido reiteradamente con las Resoluciones Finales emitidas por el(la) Procurador(a).

(45) Secretario(a): Se refiere a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que forman parte del Gabinete Constitucional del Gobernador, conforme al Artículo IV, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico.

(46) Testigos: Persona(s) con conocimiento personal de los hechos.

(47) Unidad Administrativa: Se refiere a un área administrativa de trabajo, oficina, departamento, programa, sección, o dependencia de la Oficina.

(48) Vista Administrativa: Se refiere a la vista que llevará a cabo el(la) Gerente Regional con el(la) investigador(a) o los(las) investigadores(as), el(la) funcionario(a) autorizado(a), el(los) testigo(s) si alguno, y los(las) funcionarios(as) de la Agencia querellada con suficiente autoridad para formalizar acuerdos, con el propósito de indagar sobre los hechos que motivan la querella y auscultar la(s) razón(es) por la(s) cual(es) la(s) querella(s) no se ha(n) resuelto satisfactoriamente y no se ha llegado a una solución que ponga fin a la(s) misma(s).

(49) Vista Ejecutiva: Es la vista que llevará a cabo y será presidida por el(la) Procurador(a) o por quien éste(a) delegue, con el(la) Ejecutivo(a) Principal de la Agencia querellada. También podrán ser citados, y estar presentes, el(la) Facilitador(a), los(as) funcionarios(as) autorizados(as) de

la Agencia querellada, los testigos y la parte querellante. Dicha vista podrá ser grabada y se realizará un acta de lo acontecido.

III. POLÍTICA PÚBLICA

ARTÍCULO 3. DECLARACION DE POLITICA PUBLICA

Es política pública del Gobierno garantizarle a la ciudadanía el derecho a recibir, por parte de las Agencias, servicios públicos de calidad y excelencia. A tales fines, estos servicios deberán ser ofrecidos conforme a las leyes y reglamentos aplicables y ejecutados en forma justa, eficiente, expedita, correcta y a tenor con el debido proceso de ley.

Para fiscalizar la implementación de esta política pública se crea la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía a cargo de el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía. Esta Procuraduría tendrá funciones investigativas, fiscalizadoras, remediales y educativas, con el propósito de que se provean los remedios adecuados, recomendaciones y las acciones correctivas que sean necesarias ante actuaciones u omisiones que lesionen los derechos de la ciudadanía. La Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía estará facultada para actuar en representación de la ciudadanía, en el carácter individual o grupal de esta, o por iniciativa propia, en la defensa de sus derechos ante las Agencias y las ONGs según estos términos se definen en esta Ley. Así como para velar y fiscalizar que las Agencias cumplan con los objetivos, las disposiciones y la política pública de esta Ley.

1 La misión de la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía será procurar
2 que las Agencias, al ofrecer sus servicios, garanticen a la ciudadanía los derechos
3 reconocidos por las leyes y reglamentos aplicables a estas, y que los
4 procedimientos administrativos sean accesibles, eficientes, justos, económicos,
5 confiables, simples, reduciendo el trámite burocrático, y sin discrimen alguno.

6 Para lograr estos propósitos, la Oficina tendrá las facultades de investigar e
7 informar al público, a la Asamblea Legislativa y al(la) Gobernador(a) sobre sus
8 hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El(La) Procurador(a) recomendará a
9 las Agencias medidas correctivas y de ser necesario, al(la) Gobernador(a), la
10 imposición discrecional de sanciones económicas presupuestarias a las Agencias
11 que reiteradamente, incumplan con las correcciones recomendadas.

12 La efectividad de la encomienda de la Procuraduría, según establecida, se
13 fortalecerá con una combinación del ejercicio de fiscalización, la facultad de hacer
14 recomendaciones de acciones correctivas y la de poder solicitar al(la)
15 Gobernador(a) la imposición, discrecional, de sanciones económicas
16 presupuestarias a las Agencias que incumplan, reiteradamente, con las
17 recomendaciones de el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía; todo ello unido a la
18 libertad de informar y/o denunciar públicamente las acciones u omisiones
19 administrativas que incumplan con los principios y parámetros expresados
20 anteriormente.

21 Las Agencias del Gobierno vendrán obligadas a reconocer a la Procuraduría
22 de la Ciudadanía como el único ente u organismo gubernamental efectivo y

fiscalizador que representa a el(la) ciudadano(a) frente a estas, para la reparación de agravios y evitar acciones u omisiones arbitrarias, fuera del marco de la ley o reglamento, injustas, incorrectas o tardías. Por lo que las recomendaciones que haga la Procuraduría de la Ciudadanía a las Agencias, en los casos e investigaciones de la Oficina; deberán recibir la más alta y seria consideración por parte de éstas (las Agencias); y en ausencia de que entren en conflicto con alguna ley o normativa constitucionalmente válida, deberán acatarlas y hacerlas suyas. Igual consideración deberán ofrecerle las ONGs, según definidas, en cuanto a los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

La Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía procurará el fiel cumplimiento con esta Ley, la política pública aquí establecida, y realizará esfuerzos para prevenir y corregir violaciones a los derechos de la ciudadanía y a los principios de sana administración, con el propósito de que toda persona reciba servicios de forma justa, rápida y equitativa, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.

IV. CREACIÓN DE LA OFICINA Y DEL CARGO DE PROCURADOR(A) DE LA CIUDADANÍA

ARTÍCULO 4. CREACIÓN DEL CARGO DE PROCURADOR(A) Y DE LA OFICINA

Se crea la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía, la cual estará adscrita a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Tendrá personalidad jurídica

independiente y separada de cualquier otra Agencia o entidad pública, y capacidad para demandar y ser demandada. La Oficina estará dirigida por el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía u Ombudsman quien será nombrado(a) por el(la) Gobernador(a), con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara, por el término de diez (10) años y hasta que su sucesor(a) sea nombrado(a) y tome posesión del cargo. La persona designada para ocupar tal cargo no podrá haber sido nombrada anteriormente para esta posición.

ARTÍCULO 5. REQUISITOS Y SUELDOS

El cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía sólo podrá ser desempeñado por una persona mayor de edad, que haya residido en Puerto Rico durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de su nombramiento, y que, además, sea de reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimiento y experiencia en el campo de la administración pública y la gestión gubernamental. El(La) Ombudsman devengará un sueldo anual equivalente al de un Juez del Tribunal de Apelaciones.

Ninguna persona que esté ocupando un puesto electivo o ejecutivo que requiera confirmación del Senado; podrá ser nombrada, durante el término por el cual fue electo(a) o designado(a), para ocupar el cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía.

ARTÍCULO 6. PERSONAL DE LA OFICINA Y DELEGACIÓN DE FUNCIONES

1 El(La) Procurador(a) podrá nombrar un(a) Procurador(a) Auxiliar y delegar
2 en éste(a) o en otro funcionario(a) que designe, cualesquiera de sus funciones
3 según dispuestas en esta Ley, excepto la de nombrar personal y adoptar los
4 reglamentos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley. La persona
5 nombrada como Procurador(a) Auxiliar deberá reunir todos los requisitos que
6 exige esta Ley para el cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía.

7 No obstante, el(la) Procurador(a) Auxiliar podrá nombrar personal y
8 adoptar los reglamentos que sean necesarios, cuando actúe en calidad de
9 Procurador(a) de la Ciudadanía Interino(a).

10 Se faculta, además, al(la) Procurador(a) a establecer, mediante
11 reglamentación al efecto, la administración del personal de la Oficina, los
12 procedimientos que considere pertinentes para la radicación y tramitación de las
13 querellas y las investigaciones de estas, y sobre el modo que habrá de informar
14 sobre estas, sus conclusiones y recomendaciones.

15 El(La) Procurador(a) de la Ciudadanía podrá reclutar y nombrar el personal
16 que fuere necesario para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. Este personal
17 será considerado para todos los efectos prácticos y legales como funcionarios(as)
18 y o empleados(as) del Gobierno de Puerto Rico.

19 El personal estará excluido de las disposiciones de la Ley 8-2017, según
20 enmendada, conocida como “Ley de Administración y Transformación de los
21 Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. No obstante, le será de

1 aplicación el Reglamento de Personal de la Oficina de el(la) Procurador(a) de la
2 Ciudadanía debidamente aprobado por este(a), con este propósito.

3 Igualmente, el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía queda facultado(a) para
4 contratar los servicios técnicos, consultivos y profesionales que entienda
5 convenientes para la implementación de esta Ley.

6 El(La) Ombudsman podrá nombrar Procuradores(as) Especializados(as) en
7 aquellas áreas de la gestión pública que se disponga por ley, como lo son los
8 Procuradores(as) Especializados(as) de Pequeños Negocios, Transporte Público y
9 Sistemas de Seguridad de Bancos de Información del Gobierno. También podrá
10 nombrar los(las) Procuradores(as) Especializados(as) en otras áreas que entienda
11 es necesario atender, fiscalizar y/o investigar, con énfasis especial, en la forma en
12 que se prestan los servicios a la ciudadanía. Todos estos serán funcionarios de
13 confianza de el(la) Ombudsman y llevarán el título del Procurador(a)
14 Especializado(a) del área, materia, ley o asunto de su incumbencia y para el cual
15 han sido nombrados(as).

16 Los(Las) Procuradores(as) Especializados(as) responderán directamente a
17 el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía y estarán sujetos a la autoridad y supervisión
18 de este(a) y a la reglamentación que el(la) Ombudsman establezca para el
19 desempeño de sus funciones.

20 El(La) Ombudsman nombrará el personal administrativo y proveerá los
21 recursos necesarios para que los Procuradores(as) Especializados(as) ejerzan su
22 labor.

Cualquier ley aprobada con anterioridad o posterioridad a la presente, requiriéndole al Procurador(a) de la Ciudadanía la designación o nombramiento de un Procurador(a) Especializado(a) para atender un área o asunto de interés para la ciudadanía, será implementada por el(la) Ombudsman.

Los(as) Procuradores(as) Especializados(as) tendrán la facultad de implementar y hacer cumplir los propósitos de esta Ley y la política pública que inspira la misma.

ARTÍCULO 7. VACANTE DEL CARGO

La Asamblea Legislativa mediante Resolución Concurrente aprobada por dos terceras ($\frac{2}{3}$) partes del total de los miembros de cada Cámara, previa notificación y vista, podrá declarar vacante el cargo de Procurador(a) de la Ciudadanía si determinare que este(a), está incapacitado(a) total y permanentemente, o que ha incurrido en negligencia crasa en el desempeño del cargo o en conducta reprobable o antiética.

En caso de enfermedad, incapacidad, ausencia o cuando por cualquier causa, el cargo de Procurador(a) adviniere vacante, el(la) Procurador(a) Auxiliar asumirá todas las funciones de este(a) hasta tanto el(la) sucesor(a) sea designado(a) y tome posesión del cargo. El nuevo nombramiento de él(la) Procurador(a) de la Ciudadanía se extenderá por el término de diez (10) años.

V. JURISDICCIÓN, FUNCIONES Y DEBERES DE LA OFICINA DE EL (LA) OMBUDSMAN

ARTÍCULO 8. AMBITO DE LA JURISDICCIÓN

1 La Oficina de el(la) Ombudsman, tendrá jurisdicción sobre las Agencias,
2 para investigar sus actos y omisiones en el ofrecimiento de servicios
3 gubernamentales y podrá ejercer las facultades y atribuciones que esta Ley le
4 concede.

5 Respecto a las ONGs, la jurisdicción de la Oficina de el(la) Ombudsman
6 para investigar los actos y omisiones de estas, al ofrecer sus servicios al público se
7 limitará exclusivamente a todo lo que se refiera a la fiscalización del uso de los
8 fondos públicos asignados a dichas organizaciones.

9 ARTÍCULO 9. FUNCIONES Y DEBERES DE LA OFICINA

10 La Oficina tendrá los siguientes deberes y funciones además de otras
11 atribuciones dispuestas en esta Ley o en las leyes o programas, cuya
12 administración o implantación se le delegue:

13 (a) Atender, conforme a lo establecido en esta Ley, los casos que presente la
14 ciudadanía ante la consideración de la Oficina.

15 (b) Realizar y fomentar estudios e investigaciones, así como recopilar y
16 analizar estadísticas sobre las ejecutorias, procedimientos y servicios que se
17 ofrecen en las Agencias u ONGs. Además, analizar los factores que afecten
18 los derechos de la ciudadanía al recibir los servicios.

19 (c) Fiscalizar el cumplimiento de la política pública establecida en esta Ley,
20 velar por los derechos de la ciudadanía y procurar que se cumpla con las
21 leyes y reglamentos aplicables a las Agencias; y que se adopten las acciones

1 afirmativas y correctivas conforme las investigaciones, informes y
2 recomendaciones de la Oficina.

3 (d) Presentar, a discreción de el(la) Procurador(a), ante los tribunales y/o
4 los foros administrativos, por sí o en representación de la ciudadanía,
5 individual o colectivamente, las acciones que estime pertinentes, para
6 atender las violaciones a esta Ley y a la política pública establecida. La
7 Oficina estará exenta del pago y cancelación de todo tipo de sellos, aranceles
8 y derechos requeridos para presentación y tramitación de cualesquiera
9 documentos, escritos, acciones o procedimientos o para la obtención de
10 copias de cualquier documento, grabación o transcripción ante los
11 Tribunales de Justicia y las Agencias.

12 (e) Revisar y evaluar las actividades, los procedimientos y los servicios de
13 las agencias, con el propósito de garantizar el respeto de los derechos de la
14 ciudadanía y promover que estos se presten de manera ágil, accesible,
15 confiable y sencilla, con la menor carga burocrática posible y sin discrimen
16 de clase alguna.

17 (f) Evaluar y considerar el impacto que puedan tener los nuevos
18 acontecimientos y cambios económicos, tecnológicos, sociales y de política
19 pública sobre la forma y manera en que se ofrecen los servicios a la
20 ciudadanía, a los fines de orientar y recomendar a las distintas Agencias,
21 cambios y ajustes en sus procedimientos, trámites y regulaciones, a tono
22 con las últimas tendencias organizacionales y administrativas.

1 (g) Educar y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, y los servicios que
2 ofrece la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía, para
3 salvaguardarlos.

4 (h) Fomentar y procurar una comunicación, coordinación, cooperación y el
5 intercambio de datos, información e ideas entre las distintas Agencias con
6 el propósito de promover un mejor, eficiente, y más coordinado servicio a
7 la ciudadanía.

8 (i) Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para dar
9 seguimiento a los proyectos de ley presentados ante la Asamblea
10 Legislativa que incidan, directa o indirectamente, sobre los procedimientos
11 y trámites administrativos de las agencias o sobre los servicios que estas
12 prestan a la ciudadanía. Dicho seguimiento comprenderá la evaluación de
13 aquellas medidas que puedan agilizar y mejorar tales procedimientos y
14 servicios, así como de aquellas que puedan tornarlos más complejos, menos
15 transparentes o ineficientes, o resultar incompatibles con las leyes y los
16 reglamentos aplicables. Como resultado de esta evaluación, podrán
17 someterse las recomendaciones pertinentes a la Asamblea Legislativa, sus
18 comisiones o los legisladores concernidos.

19 (j) Proponer aquella legislación y reglamentación que estime conveniente
20 para el desarrollo efectivo de la política pública establecida en esta Ley y de
21 los derechos que la Constitución de Puerto Rico, la de Estados Unidos y las
22 leyes, reconocen a la ciudadanía.

(k) Orientar, realizar investigaciones, rendir informes, recomendar acciones correctivas y procesar las querellas presentadas ante la consideración de la Oficina.

(l) La Oficina promoverá, fiscalizará y procurará que los trámites, procedimientos y servicios que ofrecen las Agencias a los ciudadanos(as), mediante sus páginas de internet y plataformas digitales, sean accesibles, sencillas e intuitivas, de tal manera que estos puedan utilizarlas en forma rápida, sencilla y eficiente; sin importar la edad, la diversidad funcional, el grado de escolaridad alcanzado o nivel de conocimiento de los sistemas computarizados del usuario.

(m) La Oficina servirá como organismo asesor de la legislatura en materia de legislación relacionada con los trámites, procedimientos y servicios que ofrecen las Agencias.

VI FACULTADES GENERALES DE EL(LA) PROCURADOR(A) DE LA CIUDADANÍA

ARTÍCULO 10. FACULTADES Y FUNCIONES DE EL(LA) PROCURADOR(A)

El(La) Procurador(a) a fin de cumplir con los propósitos de esta Ley, tendrá, además, las siguientes facultades y funciones:

(a) Ser la autoridad nominadora y organizar, dirigir y supervisar todas las funciones y actividades administrativas de la Oficina.

(b) Atender, investigar, procesar, realizar informes, emitir resoluciones u órdenes, y recomendar acciones correctivas y soluciones a las querellas

1 relacionadas con acciones u omisiones de las Agencias que lesionen los
2 derechos de la ciudadanía, les nieguen el acceso a procedimientos
3 administrativos y servicios, ágiles, justos, sencillos, transparentes,
4 equitativos y conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

5 (c) Recomendar los remedios pertinentes y conforme a derecho; así como
6 informar a cualquier Agencia, mediante Resolución, u Orden de las
7 acciones correctivas para evitar la negación, el entorpecimiento, el perjuicio
8 o la violación de la política pública establecida en esta Ley o el debido
9 procedimiento de ley en los procedimientos administrativos y el
10 ofrecimiento de los servicios a que tiene derecho toda la ciudadanía.

11 (d) Representar a la Oficina en acciones judiciales o extrajudiciales
12 promovidas por o en contra de la Oficina, comparecer ante cualquier
13 Tribunal de Justicia Estatal o Federal, foro o agencia estatal o federal y
14 establecer toda clase de derechos, acciones y procedimientos.

15 (e) Representar a la Oficina en cualesquiera actos oficiales, comunitarios o
16 de carácter cívico, foros, reuniones, o en cualquier otro evento de interés
17 público en y fuera de Puerto Rico.

18 (f) Presentar *motu proprio* una Querella, una Intervención Especial o realizar
19 una Investigación Especial, producto de investigaciones de su propia
20 iniciativa de cualquier asunto relacionado con actuaciones u omisiones
21 administrativas de las Agencias que afecten a la ciudadanía y sean continua
22 a lo establecido en esta Ley.

(g) El(La) Procurador(a) de la Ciudadanía tendrá facultad para adoptar y promulgar las reglas y reglamentos necesarios para la implementación de esta Ley, que no sean incompatibles con las leyes vigentes y la Constitución de Puerto Rico. Los Reglamentos adoptados, incluyendo aquellos aplicables a los procedimientos internos, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y tendrán fuerza de ley, una vez promulgados.

(h) Tomar juramentos y declaraciones por sí o por medio de sus representantes o funcionarios(as) autorizado(as).

(i) Requerir y obtener la información que sea pertinente a las investigaciones y querellas. Celebrar vistas, reuniones y llevar a cabo inspecciones oculares. Las vistas o reuniones serán públicas, excepto que, por razón de interés público, confidencialidad y/o por determinación del (la) Procurador(a), se decida que se conduzcan en privado.

(j) Inspeccionar documentos y récords en instalaciones de las Agencias. Obtener información y datos almacenados en sistemas computadorizados, fotografías, copias de documentos, récords, grabaciones, transcripciones de grabaciones, tomar deposiciones y transcribirlas, cuando ello sea necesario y pertinente a la investigación y/o querella ante la consideración de su Oficina.

(k) Ordenar la comparecencia y declaración de testigos, requerir la presentación o reproducción de cualesquiera papeles, libros, documentos y otra evidencia pertinente a la investigación y/o querella ante su consideración. Cuando un testigo debidamente citado a una vista o reunión no comparezca a testificar o no produzca la evidencia requerida, o cuando rehusare contestar cualquier pregunta en relación con cualquier estudio, investigación o querella, realizada conforme a las disposiciones de esta Ley, el(la) Ombudsman podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, para requerir la comparecencia a la vista o reunión y su declaración, así como la producción de la evidencia o información requerida, según sea el caso. Ninguna persona será procesada penalmente, castigada ni privada de sus bienes por hechos relacionados con el testimonio o la evidencia que haya sido obligada a prestar o presentar luego de invocar su derecho contra la autoincriminación. No obstante, dicha inmunidad no impedirá su procesamiento ni castigo por el delito de perjurio cometido al prestar ese testimonio.

(l) Confeccionar y administrar el presupuesto general de gastos de funcionamiento de la Oficina, y efectuar las transferencias de créditos que sean necesarias.

(m) Realizar Investigaciones Especiales en situaciones de alto interés público que constituyan o puedan constituir una amenaza o riesgo para la

1 seguridad, salud o bienestar de la ciudadanía provocada por alguna acción
2 u omisión de una Agencia.

3 (n) Diseñar, formular y aplicar un sistema de administración de personal
4 para la Oficina de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, y a los
5 reglamentos adoptados en virtud de esta, y promulgar las reglas a que
6 estarían sujetos los funcionarios(as) y empleados(as) de la Oficina, en el
7 cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

8 (o) Nombrar todos los funcionarios(as) o empleados(as) de la Oficina y
9 separarlos(as) de sus puestos conforme al reglamento correspondiente.

10 (p) Nombrar los miembros de la Junta de Subastas en conformidad con lo
11 dispuesto en el reglamento pertinente.

12 (q) Nombrar a los sustitutos interinos de los Funcionarios(as),
13 Directores(as), Gerentes Regionales y Procuradores(as) Especializados(as),
14 en caso de ausencia temporal o transitoria . Las personas designadas para
15 sustituir interinamente a tales funcionarios(as), podrán ser empleados de la
16 Unidad Administrativa en que ocurre la ausencia.

17 (r) Contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos necesarios,
18 convenientes y útiles para la ejecución de sus funciones, deberes, facultades
19 y para la atención de los asuntos y actividades de su competencia y
20 jurisdicción.

21 (s) Adquirir, alquilar o vender los bienes muebles e inmuebles
22 pertenecientes a la Oficina, conforme a la reglamentación aplicable y

1 suscribir cualesquiera contratos o convenios a nombre y en representación
2 de la Oficina.

3 (t) Examinar confidencialmente los expedientes del Departamento de la
4 Familia, en las querellas de la ciudadanía relacionadas con casos donde se
5 alegue maltrato a personas, radicados ante la Agencia. En la investigación
6 de este tipo de querella, la Oficina mantendrá los controles y protocolos de
7 confidencialidad de la información que surja de los expedientes de los
8 casos, en forma similar a los controles y protocolos que utiliza el
9 Departamento de la Familia en estos casos.

10 (u) Informar y hacer públicos sus informes, resoluciones y casos relevantes,
11 una vez ponga en conocimiento a la Agencia concernida, a la Asamblea
12 Legislativa y a el(la) Gobernador(a).

13 (v) Recomendar al Gobernador(a), que, a su discreción, imponga sanciones
14 económicas presupuestarias a las Agencias que incumplan reiteradamente
15 con sus Resoluciones Finales. El(La) Gobernador(a), por recomendación de
16 el(la) Procurador(a) tomará en consideración el incumplimiento reiterado
17 de la Agencia con las Resoluciones Finales de el(la) Procurador(a) y
18 discrecionalmente, al momento de confeccionar el Presupuesto General de
19 Gastos de la Rama Ejecutiva del Gobierno, reducirá prospectivamente (no
20 en el Presupuesto vigente) la asignación presupuestaria de la Agencia para
21 el próximo año fiscal, en la cantidad de fondos que estime apropiada, como
22 sanción económica, a la Agencia en cuestión. La cantidad de fondos

1 reducida será asignada a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias
2 Médicas. El (La) Gobernador(a) deberá informarle, por escrito, al Ejecutivo
3 Principal de la Agencia de esta acción y la razón por la cual fue ejecutada,
4 enviando copia a la Oficina.

5 (w) Rendir Informes Anuales a la Asamblea Legislativa de sus gestiones,
6 estudios, informes, resoluciones o investigaciones durante la segunda
7 semana del mes de febrero de cada año. También rendirá aquellos otros
8 Informes de Investigaciones Especiales que crea convenientes o que le sean
9 requeridos por la Asamblea Legislativa.

10 (x) Notificar o referir a las Agencias concernidas o las autoridades,
11 organismos o foros administrativos competentes, cuando determinase que
12 cualquier funcionario o empleado de una Agencia ha faltado, sin
13 justificación razonable, al cumplimiento de los deberes de su cargo o
14 empleo o ha sido negligente en el desempeño del deber o ha realizado algún
15 acto que podría implicar la comisión de irregularidades administrativas o
16 delito.

17 (y) Solicitar, en cualquier momento, al Ejecutivo Principal de la Agencia, la
18 sustitución o cambio de el(la) funcionario(a) de la Agencia designado como
19 Facilitador(a), cuando entienda que este no está cumpliendo con sus
20 deberes conforme a las disposiciones de esta Ley y designar otro(a)
21 funcionario(a) su sustitución. Será un deber del Ejecutivo Principal dar
22 cumplimiento a esta solicitud, dentro del término de 15 días laborables.

(z) Podrá pertenecer y representar a Puerto Rico en las diferentes organizaciones de los Estados Unidos de América o internacionales, como la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Dicha participación deberá ser cónsona con la política pública establecida en esta Ley y la del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(aa) Cualquier otra facultad que sea cónsona con la política pública antes expresada y que procure el cumplimiento con los propósitos y objetivos, de esta Ley.

El(La) Procurador(a) podrá delegar las facultades y funciones anteriormente expresadas en los funcionarios(as) o empleados(as) que éste(a) designe, excepto la de adoptar y promulgar reglamentos y las de nombrar y separar de sus puestos a funcionarios(as) y empleados.

VII PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 11. ATENCIÓN DE LOS CASOS

La Oficina atenderá los casos que presente la ciudadanía ante su consideración, a tenor con las disposiciones de esta Ley. El(La) Ombudsman establecerá los sistemas y mecanismos administrativos necesarios para el acceso, recibo y procesamiento de las reclamaciones, asuntos y quejas que presente la ciudadanía cuando aleguen cualquier acción u omisión por parte de las Agencias

1 que lesionen los derechos que le reconocen la Constitución de Puerto Rico, las
2 leyes y los reglamentos en vigor.

3 Cualquier ciudadano(a) puede presentar un caso para que se realice una
4 investigación de un asunto, reclamación o queja, relacionada con actuaciones u
5 omisiones administrativas de las Agencias.

6 El planteamiento o señalamiento podrá presentarse en la Oficina más
7 cercana a el (la) ciudadano(a), mediante una comunicación escrita, visita personal,
8 llamada telefónica o mediante cualquier medio electrónico permitido, según
9 dispuesto por reglamento.

10 Presentado el caso por el(la) ciudadano(a) ante la Oficina, se asignará a
11 un(a) investigador(a) o funcionario(a) autorizado(a), para su atención. El(La)
12 ciudadano(a) deberá ser entrevistado(a) sobre el asunto, por el(la) investigador(a)
13 asignado(a) o funcionario(a) autorizado(a), y se le requerirá cumplimentar,
14 personal, por teléfono o electrónicamente, el formulario o documento
15 correspondiente para la presentación de un caso, y suministrar cualquier
16 documento o evidencia al respecto que tenga disponible.

17 En todo caso presentado ante la consideración de la Oficina deberá
18 expresarse una relación de hechos sobre los trámites que se han realizado ante la
19 Agencia, si alguno. Con la información provista por el(la) ciudadano(a), el(la)
20 investigador(a), o funcionario(a) autorizado(a) realizará una evaluación del asunto

1 planteado y determinará si el caso se atenderá como una “Orientación”, una
2 “Coordinación”, una “Intervención Especial” o una “Querella”.

3 Si el(la) investigador(a) o funcionario(a) autorizado(a) determinase que el
4 (la) ciudadano(a) requiere una Orientación, porque tiene inquietudes o
5 interrogantes en cuanto a los procedimientos a seguir ante la Agencia bajo la
6 jurisdicción de la Oficina o porque no ha comenzado el trámite administrativo, o
7 lo ha iniciado incorrectamente y/o desconoce la reglamentación aplicable y los
8 derechos que le asisten; o el asunto es frívolo o un caso presentado de mala fe o
9 no plantea una controversia real y sustancial en esos momentos, procederá a
10 orientarlo al respecto.

11 Por otro lado, si el(la) investigador(a), luego de su evaluación del caso,
12 determina que la Oficina no tiene jurisdicción sobre la entidad gubernamental
13 concernida, referirá a el(la) ciudadano(a) a la entidad correspondiente, y de ser
14 necesario, procurará una Coordinación para que reciba la debida atención.

15 En las Intervenciones Especiales, el(la) ciudadano(a), en su primer contacto
16 con la Oficina, expone o alega una situación de alto interés público, provocada por
17 acción u omisión de una Agencia, o una amenaza o riesgo para su seguridad o
18 salud y/o de la ciudadanía en general. El(la) investigador(a), inmediatamente, y
19 con carácter de urgencia, informará la situación, a el(la) Ombudsman para que
20 este(a) ordene al(la) investigador(a) u otro funcionario(a) autorizado(a), realizar
21 una investigación preliminar, urgente, del asunto planteado, para corroborar lo
22 informado por el(la) ciudadano(a) e inmediatamente procederá a intervenir

1 solicitando a la(s) Agencia(s) correspondiente(s), la acción inmediata, con el
2 propósito de que se corrija la situación. El(la) Procurador(a) podrá iniciar una
3 Investigación Especial por iniciativa propia. El(La) Procurador(a) podrá denunciar
4 la situación públicamente, por los medios de comunicación disponibles de
5 entenderlo pertinente y necesario. Luego de efectuada la denuncia pública y
6 terminada la emergencia, temporal o permanentemente, el caso continuará
7 tramitándose conforme las disposiciones de esta Ley, de ser necesario.

8 Si del análisis y evaluación de la situación que presenta el(la) ciudadano(a)
9 al(la) investigador(a), surge que se trata de una reclamación o queja de este(a)
10 sobre las acciones u omisiones administrativas de alguna Agencia que lo(la)
11 afecten, perjudiquen o sean contrarias a las leyes y reglamentos aplicables, y/o a
12 lo establecido en esta Ley, se procederá a tramitar el caso como una Querella.

13 También, el(la) Ombudsman, o el funcionario(a) autorizado(a) en quien
14 este delegue, puede, *motu proprio*, presentar una querella para que se inicie una
15 investigación del asunto relacionado con actuaciones u omisiones administrativas
16 de las Agencias o en los servicios que ofrecen, que afecten a la ciudadanía y sean
17 contrarias a lo establecido en esta Ley. En las querellas iniciadas por el(la)

propio(a) Ombudsman, este(a) fungirá como el(la) querellante. Las querellas radicadas por el(la) propio(a) Procurador(a) serán denominadas como “Querellas Ejecutivas.” El(La) Ombudsman tendrá la facultad de emitir la “Resolución Final” de las querellas, aún en las que hayan sido radicadas motu proprio.

ARTÍCULO 12. QUERELLAS

Toda querella promovida al amparo de las disposiciones de esta Ley se tramitará en la forma que disponga el reglamento que a estos efectos la Oficina apruebe.

Serán materias propias de querellas, cualesquiera reclamaciones, quejas o asuntos relacionados con actuaciones y omisiones administrativas en el ofrecimiento de los servicios, por parte de las Agencias objeto de la jurisdicción de la Oficina, que sean o aparenten ser:

- (a) Contrarias al cumplimiento del deber, a la política pública, a la ley, reglamento o procedimiento administrativo establecido;
- (b) Irrazonables, injustas, arbitrarias, negligentes o discriminatorias;
- (c) No estén acompañadas de una adecuada exposición de razones o fundamentos jurídicos, cuando la ley o los reglamentos lo requieran; o
- (e) Ejecutadas en forma ineficiente, injusta o errónea.
- (f) Contrarias a las disposiciones de esta Ley y/o la política pública que la inspira.

La Oficina podrá realizar la investigación y/o atender las querellas a los efectos de que se emita una orden y/o resolución para que se corrija y/o ofrezca un remedio adecuado a la situación objeto de la querella.

1 No obstante, lo anteriormente dispuesto, no se atenderán o investigarán
2 querellas en aquellos casos en que a juicio de el(la) Ombudsman:

3 (1) Exista un remedio adecuado en ley para reparar el error, ofensa o
4 injusticia objeto de la querella.

5 (2) La reclamación o querella se refiere a algún asunto fuera de la
6 jurisdicción de la Oficina.

7 (3) El querellante no demuestra interés en proceder con el objeto de la
8 querella.

9 (4) La querella sea frívola o haya sido presentada de mala fe; o

10 (5) La querella esté siendo investigada o atendida por alguna Agencia y a
11 juicio de el(la) Ombudsman, actuar sobre la misma representaría una
12 duplicidad de esfuerzos y recursos. Las querellas no investigadas y/o
13 atendidas por esta causa, podrán ser consideradas por el(la) Ombudsman
14 cuando dicha razón ya no esté presente.

15 ARTÍCULO 13. NOTIFICACIÓN DE LA QUERELLA

16 Cuando se trate de una querella de la ciudadanía, la Oficina notificará al
17 querellante su determinación de investigar los hechos expuestos en la querella, y
18 en la misma fecha en que realice la correspondiente notificación a el(la)
19 querellante, deberá notificarlo a la Agencia querellada, con expresión de los
20 hechos alegados en la querella, las leyes y reglamentos pertinentes y la fuente legal
21 de la facultad para realizar la investigación. La Oficina no tendrá que notificar a
22 la Agencia, cuando la naturaleza confidencial de la investigación requiera que la

1 notificación no se haga de inmediato, en cuyo caso debe efectuarse tan pronto la
2 confidencialidad de esta, lo permita.

3 ARTÍCULO 14. INVESTIGACIÓN DE LA QUERELLA

4 La querella será atendida por un(a) investigador(a) o funcionario(a)
5 autorizado(a) por la Oficina para realizar la correspondiente investigación del
6 asunto.

7 El(La) querellante deberá presentar toda la evidencia documental,
8 nombres, direcciones y teléfonos de personas con conocimiento de los hechos o
9 posibles testigos, si aplica, y otra información pertinente que le sea requerida sobre
10 el asunto, objeto de la querella. Toda alegación o argumento incluido en la
11 querella, deberá establecer una relación de hechos, sobre los trámites realizados
12 ante la Agencia querellada. Cuando se trate de una Querella Ejecutiva radicada
13 por el(la) Ombudsman, este(a) designará y autorizará la(s) persona(s) que habrá(n)
14 de realizar la investigación y el estudio del asunto, quien(es) realizará(n) la misma
15 bajo la supervisión directa de el(la) propio(a) Ombudsman, o el(la) funcionario(a)
16 designado(a) y autorizado(a) por este(a), para tales funciones.

17 Con la información provista por el (la) querellante, el (la) investigador(a) o
18 funcionario(a) autorizado(a), realizará una evaluación del caso y de entender que
19 el mismo tiene los méritos necesarios para constituir una querella, ésta se atenderá,
20 investigará y evaluará en coordinación con los(las) funcionarios(as) o
21 empleados(as) de la Agencia querellada.

ARTÍCULO 15. ALCANCE DE LA PESQUISA

El(La) Ombudsman, al realizar cualquier investigación, o atender algún asunto, a tenor con esta Ley, podrá hacer las pesquisas, obtener la información y evidencia que estime necesaria a los fines de la misma. A tales efectos las Agencias deberán dar acceso a los funcionarios y empleados de la Oficina a todos sus archivos y a los requerimientos de documentos que se hagan al respecto. Asimismo, a los fines de la investigación el(la) Ombudsman o los funcionarios a cargo de ésta, podrán celebrar aquellas vistas, audiencias, reuniones e inspecciones oculares que estimen pertinentes. No se requerirá a el(la) Procurador(a) o su Oficina, el pago de aranceles o impuestos de clase alguna por la obtención de documentos, información y evidencia en las pesquisas de reclamaciones, querellas o investigaciones realizadas conforme a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 16. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR LA PARTE QUERELLADA

Los funcionarios(as) o empleados(as) de las Agencias querelladas vendrán obligados, en todo momento, a suministrar a los investigadores(as) a cargo de la investigación de la querella, toda la información y evidencia requerida por estos(as), concernientes al ámbito de la querella.

ARTÍCULO 17. REQUERIMIENTO INICIAL A LA PARTE QUERELLADA

Efectuada la investigación y evaluación de la querella y a los fines de lograr una solución de esta, a la mayor brevedad, el(la) investigador(a) o el(la)

funcionario(a) autorizado(a) realizará un Requerimiento Inicial, por escrito, a la Agencia querellada y/o a los(las) funcionarios(as) o empleados(as) de la misma, solicitándoles que se corrija la situación que motiva la querella, dentro del término establecido por Reglamento de la OPC. Este Requerimiento Inicial podrá realizarse personalmente, por teléfono o cualquier medio electrónico.

En cualquier momento el(la) investigador(a) o funcionario(a) autorizado(a) podrá, si determinase, luego de su evaluación, que el asunto planteado carece de los méritos suficientes para constituir una querella, así se lo hará saber, por escrito, al ciudadano(a) querellante, expresando las razones para tal determinación, y advirtiéndole, que de estar inconforme con esta, podrá solicitar, por escrito, reconsideración ante el(la) Ombudsman dentro del término de tiempo que se especifique en la notificación, y según establecido por reglamento. El(La) Ombudsman podrá reconsiderar la determinación y ordenar la continuación de los procedimientos o denegar la misma, notificando por escrito a el(la) querellante. Cuando el(la) Ombudsman determine denegar la reconsideración, esta determinación terminará el caso en la Oficina, para todos los fines prácticos y legales, procediéndose a su archivo.

ARTÍCULO 18. REUNIÓN INFORMATIVA

Transcurrido el periodo concedido en el Requerimiento Inicial para corregir la situación que motiva la querella, sin que se haya solucionado, se realizará una Reunión Informativa, entre el(la) investigador(a) o el(la) funcionario(a) autorizado(a) y los(las) funcionarios(as), incluyendo el jefe de la agencia de la

1 parte querellada, o en quien este(a) delegue, para indagar sobre los hechos de la
2 querella recopilados hasta el momento, e informarle cuáles son sus hallazgos y
3 conclusiones en la investigación. También, informará cuál es su recomendación
4 con respecto a la solución final de la querella, y si es posible, en esta etapa,
5 formalizar acuerdos a estos efectos, y lograr una solución de la misma. El(La)
6 investigador(a) tendrá discreción para determinar, cual(es) funcionario(s) dentro
7 de la estructura organizacional de la Agencia querellada deberá citar a la Reunión
8 Informativa para procurar la solución de la querella. También podrá, con la
9 anuencia de el(la) Gerente Regional, citar a esta reunión al Facilitador de la
10 Agencia de entenderlo conveniente y necesario. El(La) investigador(a) celebrará
11 la Reunión Informativa y notificará de la misma a el(la) Gerente Regional de la
12 Oficina, quien, tendrá discreción para comparecer a la Reunión Informativa.

13 Celebrada la Reunión Informativa sin que a juicio de el(la) investigador(a)
14 o el(la) funcionario(a) autorizado(a), se haya resuelto satisfactoriamente la
15 querella, se le informará a el(la) Gerente Regional correspondiente o el(la)
16 funcionario(a) designado(a) por el(la) Ombudsman, a tales efectos.

17 El(La) investigador(a) tendrá un término máximo establecido por
18 reglamento, contados a partir del momento en que el caso fue presentado ante la
19 Oficina, para concluir la investigación y notificarle a el(la) Gerente Regional que la
20 querella no se ha resuelto satisfactoriamente, a pesar de los esfuerzos realizados.
21 Transcurrido el término dispuesto por Reglamento, el(la) investigador(a) o

funcionario(a) autorizado a cargo de la investigación, notificará a el(la) Gerente Regional, para que se celebre una Vista Administrativa.

ARTÍCULO 19. VISTA ADMINISTRATIVA

El(La) Gerente Regional llevará a cabo una Vista Administrativa conforme a Reglamento. En esta Vista Administrativa estarán presentes: el(la) investigador(a) o los investigadores(as), el funcionario(a) autorizado(a) de la Oficina para investigar la querella, según sea el caso, los testigos, si alguno, y los funcionarios(as) de la Agencia querellada con suficiente autoridad para formalizar acuerdos con el propósito de llegar a una solución que ponga fin a la querella. También podrá ser citado(a) el(la) Facilitador(a), discrecionalmente.

El(La) Gerente Regional celebrará la Vista Administrativa, dentro del periodo dispuesto por Reglamento, a partir del momento en que le sea referida la querella por el (la) investigador(a). El(La) Gerente Regional, a su discreción, podrá llevar a cabo más de una Vista Administrativa.

El(La) Gerente Regional no vendrá obligado(a) a celebrar una Vista Administrativa, cuando la querella se haya resuelto, o cuando se haya logrado algún tipo de acuerdo satisfactorio para todas las partes, entre el(la) investigador(a), el funcionario(a) concernido de la Agencia querellada y el(la) querellante, siempre que dicho acuerdo pueda cumplirse dentro del periodo

1 establecido para la conclusión de la investigación y la referida de la querella al
2 Gerente Regional.

3 En esta Vista Administrativa, el(la) Gerente Regional realizará todos los
4 esfuerzos a su alcance y utilizará los medios legales disponibles para procurar una
5 solución de la querella que sea justa, razonable y conforme a derecho. Celebrada
6 la Vista Administrativa y culminado el procedimiento anteriormente descrito, sin
7 que se haya resuelto la querella satisfactoriamente, el(la) Gerente Regional
8 realizará un Informe al respecto. Cuando la querella haya sido presentada ante la
9 autoridad nominadora por el(la) Ombudsman, a iniciativa propia, no será
10 necesario que medie un Informe de el(la) Gerente Regional.

11 El(La) Gerente Regional referirá su Informe y el expediente de la querella a
12 el(la) Director(a) de Servicios Institucionales. El(La) Director(a) de Servicios
13 Institucionales, en conjunto con el(la) Procurador(a) Auxiliar, evaluarán el
14 expediente de la querella con el propósito de verificar que esté completo y que del
15 mismo surja que se han realizado los trámites administrativos, gestiones y
16 esfuerzos necesarios con el propósito de lograr una solución satisfactoria de la
17 querella; por lo que procede referir la misma a el(la) Ombudsman para la
18 determinación final.

19 El (La) Ombudsman evaluará el Informe, y a su discreción, emitirá una
20 Orden de Mostrar Causa, para que la parte querellada muestre causa por la cual
21 no se debe resolver la querella conforme a la recomendación de el(la) Gerente

1 Regional expresada en su Informe, dentro del término que se disponga en la
2 Orden.

3 En esta misma Orden, de entenderlo necesario y conveniente, el (la)
4 Ombudsman notificará al querellante y a la parte querellada para la celebración
5 de una Vista Ejecutiva a los fines de aquilatar toda la información y evidencia del
6 caso y resolver definitivamente la querella.

7 ARTÍCULO 20. VISTA EJECUTIVA

8 La Vista Ejecutiva será presidida por el(la) Ombudsman. Este(a) podrá
9 delegar la celebración de la misma en un(a) funcionario(a) de la Oficina o en un(a)
10 Oficial Examinador(a) Independiente (en adelante el(la) Oficial Examinador(a)),
11 según entienda pertinente. Estos(as) fungirán como representantes
12 autorizados(as) de el(la) Ombudsman.

13 En esta Vista Ejecutiva deberá ser citado el(la) Ejecutivo(a) Principal de la
14 Agencia. También podrán ser citados y estar presentes: el(la) Facilitador(a), los(las)
15 funcionarios(as) de la Agencia querellada, los testigos y la parte querellante. Una
16 vez citados estos(as) funcionarios(as) pertinentes de las Agencias, su asistencia a
17 la Vista Ejecutiva constituirá un deber ministerial para todos los efectos legales.
18 La incomparecencia sin justificación de estos funcionarios(as) a la Vista Ejecutiva
19 dará lugar a la presentación de una solicitud de desacato o cualquier otro
20 procedimiento especial ante el Tribunal de Primera Instancia con el propósito de
21 lograr su comparecencia. La parte querellante deberá ser citada para comparecer

1 a la Vista Ejecutiva. En la Vista Ejecutiva se podrá tomar juramento a los
2 comparecientes, podrá ser grabada y se realizará un acta de todo lo acontecido.

3 El(La) Ombudsman dentro de sus facultades para adjudicar la querella con
4 recomendación y cuando lo entienda necesario y conveniente, podrá designar y/o
5 contratar un(a) Oficial Examinador(a) para que presida y lleve a cabo los
6 procedimientos en la Vista Ejecutiva que se celebre. Podrá fungir como Oficial
7 Examinador(a) Independiente un(a) abogado(a) o un funcionario(a), que sea
8 abogado, de la Oficina expresamente designado(a) por el (la) Ombudsman.

9 Cuando la Vista Ejecutiva sea presidida por un(a) Oficial Examinador(a)
10 este(a) rendirá un Informe a el(la) Ombudsman, con determinaciones de hechos y
11 conclusiones de derecho, incluyendo su determinación y recomendación en
12 cuanto a la solución del caso. Los procedimientos ante el(la) Oficial Examinador(a)
13 y/o el(la) Ombudsman se realizarán conforme a lo expresado anteriormente y/o
14 al reglamento que adopte la Oficina para ello. El(La) Ombudsman evaluará el
15 Informe de el(la) Oficial Examinador(a) y emitirá la correspondiente Resolución
16 Final, adoptándolo en todas sus partes, rechazándolo o modificándolo.

17 El(La) Ombudsman o su representante autorizado, con anterioridad a la
18 Vista Ejecutiva, podrá realizar la(s) reunión(es) que entienda pertinente(s) y
19 conveniente(s) con los(las) funcionarios(as) de las Agencias querelladas, a los fines
20 de resolver la querella o llegar a algún acuerdo sobre la misma. Esta(s) reunión(es)
21 se denominará(n) Reunión(es) Ejecutiva(s). Cuando en la Reunión Ejecutiva se

1 llegue a algún acuerdo que resuelva definitivamente la querella, se realizará un
2 acta al respecto.

3 Los términos de tiempo y las reglas para llevar a cabo el procedimiento
4 administrativo anteriormente descrito que no se establezcan expresamente en esta
5 Ley, serán establecidos de conformidad con el reglamento que se apruebe por
6 el(la) Ombudsman, a tales efectos. El(La) Ombudsman podrá prorrogar los
7 términos de tiempo directivos del procedimiento administrativo establecidos por
8 esta Ley o Reglamento, cuando, a su juicio, medien circunstancias meritorias, y
9 previa solicitud al efecto.

10 ARTÍCULO 21. FACILITADOR(A)

11 En virtud de esta Ley, todo Secretario, Director, Jefe, Autoridad Nominadora o
12 Ejecutivo Principal de una Agencia tendrá la obligación de designar a un funcionario de
13 confianza, adscrito a su oficina, para que se desempeñe como Facilitador de la Oficina de
14 la Procuraduría de la Ciudadanía ante la Agencia correspondiente.

15 El Facilitador tendrá, entre otros, los siguientes deberes y funciones:

16 (a) Ser el enlace oficial, en todo momento, entre la Oficina de el(la)
17 Ombudsman y la Agencia.

18 (b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance en la Agencia para lograr la
19 solución expedita de las querellas conforme a ley y reglamento, referidas
20 ante su consideración por la Oficina de el(la) Ombudsman.

21 (c) Coordinar con los funcionarios y empleados pertinentes de la Agencia
22 todas las reuniones, vistas, entrevistas, inspecciones oculares y cualquier

otra gestión que sea necesaria, a petición de la Oficina, para procurar la solución de la querella, en el menor tiempo posible, o la realización de una Investigación Especial.

(d) Cuando le sea solicitado, requerir y obtener de los (las) funcionarios(as) o empleados(as) de la Agencia concernida toda la información, documentos y/o evidencia requerida por la Oficina de el(la) Ombudsman, con motivo de una querella, o una Investigación Especial que no haya sido suministrada a los(las) funcionarios(as) o empleados(as) correspondientes de la Agencia, para ser enviada en forma expedita a la Oficina.

(e) Comparecer a las reuniones, vistas o audiencias que sea citado por la Oficina de el(la) Ombudsman; y procurar que los funcionarios(as) y empleados(as) de la Agencia comparezcan a estas, cuando sean citados.

(f) Colaborar con la Oficina de el(la) Ombudsman, con sentido de urgencia y rapidez, cuando sea notificado de que se trata de un caso de intervención especial.

(g) Atender con prioridad cuando se le notifique que se trata de una Querella Ejecutiva de el(la) Ombudsman, o de una Investigación Especial.

(h) Realizar todas las gestiones a su alcance y necesarias para que la Agencia adopte, corrija y cumpla con los hallazgos y recomendaciones de la Oficina en sus Informe(s), Orden(es) y/o en las Resoluciones Finales.

ARTÍCULO 22. RESOLUCIÓN FINAL

Concluido el Procedimiento Administrativo descrito anteriormente, sin que se haya resuelto satisfactoriamente la querella, el(la) Ombudsman, le informará a la Agencia que se propone emitir una Resolución Final adjudicando una recomendación contraria a la posición de la Agencia, en el caso. El(La) Ombudsman concederá a la Agencia un término improrrogable de diez (10) días laborables para que reconsidere su posición, y adopte la recomendación de la Oficina. Transcurrido este término, sin que la Agencia haya reconsiderado su postura, aceptando la recomendación de la Oficina, el(la) Procurador(a) emitirá su Resolución Final. La Agencia querellada tendrá el término de quince (15) días laborables, contados a partir del recibo de la notificación de la Resolución Final por parte de el(la) Ombudsman, para cumplir con la misma.

En la alternativa, si la Agencia adopta la recomendación de el(la) Ombudsman, así se hará constar en la Resolución Final. Igualmente se hará constar si el(la) Ombudsman determina que la querella debe ser desestimada por que se ha tornado académica, es frívola o carece de los méritos. La Resolución Final de el(la) Ombudsman será final, firme e inapelable. La Resolución Final de el(la) Ombudsman será notificada a las partes objeto de la querella, a la Asamblea Legislativa y a el(la) Gobernador(a), conforme establezca el reglamento que a tales efectos se apruebe.

A las ONGs no le será de aplicación el mecanismo discrecional de la reducción presupuestaria por parte de el(la) Gobernador(a), como sanción a las

Agencias que reiteradamente incumplan con las recomendaciones de el(la) Procurador(a) en sus Resoluciones Finales.

VIII. RECURSOS EXTRAORDINARIOS

ARTÍCULO 23. VIOLACIÓN DE LEY Y/O REGLAMENTO:

Cuando en una querella, el(la) Ombudsman emita una Resolución Final, en la que determine que la Agencia querellada y/o sus funcionarios(as), agentes o empleados(as) han actuado contrario a la ley y/o reglamento y/o a uno o más de los incisos (a) a la (f) del Artículo 12 de esta Ley y le requiera a estas(os) que corrija(n) y ofrezca(n) un remedio adecuado a la situación que motiva la querella; y la Agencia incumple con lo establecido en la Resolución Final; el(la) Ombudsman, en auxilio de su jurisdicción, podrá, según sea el caso y como entienda pertinente, instar ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso extraordinario de Injunction Preliminar y Permanente, un Mandamus y/o una Sentencia Declaratoria conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, para que se cumpla con su Resolución Final. El Ombudsman también podrá instar un recurso extraordinario de los mencionados, cuando emita una Resolución y Orden y/o cuando la Agencia querellada y/o sus funcionarios(as), agentes o empleados (as) se nieguen a cumplir con un deber ministerial.

Cuando el(la) Ombudsman opte por presentar un Injunction, estará exento(a) de alegar la existencia de daño irreparable, juramentar la Petición y de prestar fianza. El Tribunal de Primera Instancia, al considerar la expedición del

1 Injunction, aplicará la Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil, en todo aquello que
2 no sea incompatible con lo aquí dispuesto.

3 Los recursos extraordinarios anteriormente mencionados sólo podrán ser
4 utilizados cuando en la Agencia no exista un procedimiento administrativo,
5 adjudicativo y adversativo, específico, establecido por ley o reglamento, que
6 permita resolver adecuadamente la situación objeto de la querella.

7 IX INVESTIGACIONES ESPECIALES

8 ARTÍCULO 24. INVESTIGACIONES DE EL(LA) PROCURADOR(A)

9 El(La) Ombudsman, cuando lo estime pertinente, podrá realizar
10 investigaciones por iniciativa propia y sin que medie una querella específica de
11 un(a) o más ciudadano(a), cuando a su juicio entienda que alguna Agencia está
12 incurriendo o podría incurrir en acciones u omisiones administrativas que
13 perjudiquen o pudieran perjudicar a la ciudadanía y/o a los servicios que se
14 ofrecen a esta, y que sean contrarias a lo establecido en esta Ley. Estas
15 investigaciones serán denominadas “Investigaciones Especiales”.

16 En estos casos el(la) Ombudsman llevará a cabo la investigación de la
17 situación utilizando los recursos, los servicios consultivos, legales, periciales y el
18 personal de la Oficina que sean necesarios para realizar la pesquisa. Cuando se
19 trate de una Investigación Especial, el(la) Ombudsman designará y autorizará a
20 las personas o funcionarios(as) o Procurador(a) Especializado(a) concernidos, que
21 habrán de realizar la investigación y el estudio del asunto, quienes llevarán a cabo
22 la misma, bajo la supervisión directa de el(la) propio(a) Procurador(a) o el(la)

funcionario(a) autorizado(a) por éste(a) para llevar a cabo estas funciones. El(La) Ombudsman le notificará al Ejecutivo(a) Principal de la Agencia correspondiente que realizará la investigación e informará sobre el ámbito de la misma.

La Agencia, sus funcionarios y empleados vendrán obligados a proveer toda la información requerida por la Oficina y a colaborar con la investigación. El(La) Ombudsman podrá citar a cualquier persona, funcionario(a) y/o empleado(a) de una Agencia o entidad gubernamental para que provea información verbal o documental, y/o ofrezca su testimonio, bajo juramento, relacionado con el ámbito de una investigación.

Una vez el(la) Ombudsman recopile la información necesaria y la evalúe, confeccionará un Informe al respecto, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Dicho Informe será notificado a el(la) Ejecutivo(a) Principal de la Agencia.

El Ejecutivo Principal tendrá un término de veinte (20) días laborables desde que recibió el Informe, para contestar el mismo y expresar su posición al respecto.

El Informe con sus recomendaciones se entenderá aceptado y las recomendaciones adoptadas cuando el Ejecutivo Principal de la Agencia en cuestión le notifique, por escrito, a el(la) Ombudsman su determinación de adoptar el Informe con las recomendaciones y cumplir con las mismas. También se entenderá aceptado el Informe y adoptadas las recomendaciones cuando haya

1 transcurrido el término de veinte (20) días laborables, luego del recibo del Informe,
2 sin que el Ejecutivo Principal de la Agencia concernida, haya contestado el mismo.

3 Cuando el Ejecutivo Principal conteste el Informe dentro del término
4 mencionado, rechazándolo, en todo o en parte, el(la) Ombudsman evaluará la
5 contestación; y determinará si acepta la posición de la Agencia expresada en su
6 contestación, y modifica su Informe, o la rechaza de plano.

7 Cuando el(la) Ombudsman determine aceptar y/o adoptar algún aspecto
8 de la contestación de la Agencia que implique alguna modificación a su Informe,
9 lo incorporará al mismo, y lo notificará nuevamente a la Agencia como un informe
10 final. El (La) Ombudsman, podrá, discrecionalmente, solicitar un Proyecto de
11 Acción Remediativa como seguimiento a los informes finales.

12 Concluido el trámite expresado anteriormente, y en cualesquiera de las
13 circunstancias mencionadas, el(la) Ombudsman notificará su Informe a la
14 Asamblea Legislativa, enviando copia al(la) Gobernador(a) de Puerto Rico. Luego
15 de esta notificación, el(la) Ombudsman tendrá discreción para hacer público el
16 contenido del Informe, sus hallazgos y recomendaciones, a los medios de
17 comunicación. Sin embargo, cuando se trate de una situación de alto interés
18 público, el(la) Ombudsman podrá hacer público los hallazgos preliminares de la
19 investigación y así reconocerlo en el escrito o documento correspondiente.

20
21 ARTÍCULO 25. AUDIENCIAS PÚBLICAS

1 La Oficina realizará Audiencias Públicas para recibir información y datos
2 para estudios e investigaciones de carácter general que la Oficina lleve a cabo sobre
3 los servicios que ofrecen las Agencias a la ciudadanía y otros asuntos relacionados.
4 Los reglamentos que a tales fines se aprueben proveerán lo necesario para el
5 cumplimiento de los siguientes aspectos procesales:

6 (a) En la celebración de Audiencias Públicas, se podrá delegar en uno(a) o
7 más de sus funcionarios(as) o empleados(as) la función de escuchar
8 testimonios o recibir cualquier otra evidencia para la Oficina.

9 (b) Las notificaciones de Audiencias Públicas podrán publicarse con diez
10 (10) días de anticipación en por lo menos dos (2) periódicos de circulación
11 general o regional que circulen en la región o área específica que abarque el
12 estudio o investigación. También podrán publicarse a través de las redes
13 sociales en la internet y/o de otros medios de comunicación cuando sea
14 necesario y razonable para una difusión más eficaz. Deberán incluir
15 descripciones detalladas de los propósitos de las Audiencias y los asuntos
16 que en ellas se considerarán.

17 (c) Todas las declaraciones verbales se oirán en sesiones públicas. Sin
18 embargo, en los casos en que el(la) Ombudsman considere que la evidencia
19 o el testimonio que se va a presentar en una Audiencia tiende a difamar,
20 degradar o incriminar a cualquier persona o a vulnerar su intimidad, para
21 proteger su identidad, o en aquellos casos en que medien circunstancia que

1 lo justifiquen, podrá hacer una excepción y optar por recibir dicho
2 testimonio en Reunión Ejecutiva.

3 (d) Cada ponente podrá, si lo estima conveniente, ser aconsejado(a) por
4 un(a) abogado(a). También tendrá derecho a que no se le fotografíe sin su
5 consentimiento, a ser interrogado(a) por su abogado(a) dentro de las
6 normas de la Audiencia y su aplicación por el(la) Ombudsman, a revisar la
7 exactitud de la transcripción de sus testimonios cuando la realización de
8 dicha transcripción sea autorizada por el(la) Ombudsman, a copiar dicha
9 transcripción y a someter manifestaciones breves, por escrito, y bajo
10 juramento para ser incluidas en el récord de la Audiencia.

11 (e) Si el(la) Ombudsman determina que alguna evidencia tiende a difamar
12 o incriminar a alguna persona, le dará la oportunidad de comparecer
13 personalmente o por escrito.

14 (f) El(La) Ombudsman determinará las demás reglas de procedimiento para
15 las Audiencias Públicas, inclusive las que se refieran a la admisibilidad de
16 evidencia y a la exclusión de personas que violen las normas que deben
17 imperar en una audiencia.

18 X. ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA

19 ARTÍCULO 26. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA OFICINA

20 El(La) Procurador(a) determinará la organización interna de la Oficina y
21 establecerá los sistemas administrativos y tecnológicos para su adecuado
22 funcionamiento y operación. A estos propósitos tendrá la responsabilidad de

1 planificar, organizar y dirigir los asuntos relacionados con los recursos humanos,
2 contratación de servicios, asignación presupuestaria, adquisición, uso y control de
3 equipo, materiales y propiedad, reproducción de documentos, transcripciones,
4 grabaciones y otros asuntos afines. Además, realizará transacciones y tomará
5 decisiones relativas al manejo y gobierno interno de la Oficina. El(La)
6 Procurador(a) nombrará el personal que fuere necesario para llevar a cabo los
7 propósitos de esta Ley y contratará los servicios de peritos(as) y asesores(as) para
8 cumplir a cabalidad con las funciones aquí dispuestas.

9 ARTÍCULO 27. ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

10 El(La) Procurador(a) establecerá oficinas regionales que faciliten y
11 promuevan el acceso de la ciudadanía a la Oficina, a los fines de cumplir con los
12 propósitos de esta Ley.

13 ARTÍCULO 28. ACUERDO DE COLABORACIÓN

14 El(La) Procurador(a) promoverá la formulación de acuerdos de colaboración
15 a nivel gubernamental y privado, sin que se entienda como una limitación,
16 acuerdos con los gobiernos, entidades gubernamentales identificadas con los
17 derechos de la ciudadanía, cuando estos acuerdos viabilicen el ejercicio de sus
18 responsabilidades, sin menoscabo de su autonomía.

19 ARTÍCULO 29. SERVICIOS DE PERSONAL POR DESTAQUE

20 La Oficina podrá solicitar a personas o instituciones privadas, así como a
21 las Agencias y/o entidades gubernamentales, por sí o a través de el(la)
22 Gobernador(a), y/o Asamblea Legislativa, los servicios de funcionarios o

1 empleados por destaque y facilidades disponibles para llevar a cabo los propósitos
2 de esta Ley.

3 La Oficina podrá contratar o nombrar a cualquier funcionario(a) o
4 empleado(a) del Gobierno o de sus Agencias o Corporaciones Públicas, con la
5 anuencia de el(la) Ejecutivo(a) Principal donde preste servicio el funcionario(a) o
6 empleado(a). En tal caso, el(la) Ejecutivo(a) Principal tiene la obligación de retener
7 el cargo o empleo a dicho funcionario(a) o empleado(a) mientras la Oficina utilice
8 sus servicios. Se autoriza, además, a la Oficina a contratar, sin sujeción a lo
9 dispuesto por el Artículo 177 del Código Político de Puerto Rico, según
10 enmendado, los servicios de cualquier funcionario(a) o empleado(a) público y a
11 pagarle por los servicios adicionales que preste a la Oficina fuera de sus horas
12 regulares de servicio.

13 La Oficina podrá, con la aprobación de el(la) Gobernador(a), encomendar a
14 cualquier Agencia que efectúe algún estudio o investigación, o alguna fase o parte
15 de los mismos, o que realice con prioridad, cualquier otra clase de trabajo que fuere
16 necesario al desempeño de sus funciones, siempre y cuando no afecte la autonomía
17 de la Oficina o cree un conflicto de intereses.

18 ARTÍCULO 30. AUTONOMIA FISCAL

19 La Oficina queda autorizada para recibir y administrar fondos provenientes
20 de asignaciones legislativas, y de transferencias, delegaciones, aportaciones y
21 donativos de cualquier clase que reciba de Agencias, y del Gobierno de los Estados
22 Unidos de America, así como los provenientes de personas, organizaciones no

1 gubernamentales, entidades gubernamentales, y de otras entidades privadas para
2 el diseño e implantación de proyectos, investigaciones y programas a ser
3 ejecutados por la Oficina.

4 Los fondos así recibidos se contabilizarán, controlarán y administrarán con
5 sujeción a las leyes que regulan el uso de fondos públicos, a las normas legales,
6 reglas con convenios en virtud de los cuales los reciba la Oficina y según los
7 reglamentos que esta adopte para esos fines. La Oficina puede recibir además
8 cualesquiera bienes muebles e inmuebles de Agencias y entidades
9 gubernamentales en calidad de préstamo, venta, usufructo o donación; y
10 poseerlos, administrarlos y usarlos para llevar a cabo las funciones dispuestas en
11 esta Ley.

12 ARTÍCULO 31. ASIGNACION Y DONATIVOS DE FONDOS

13 La Oficina gozará de las más plena autonomía administrativa,
14 presupuestaria y fiscal que le permita ejercer la custodia y control de sus fondos y
15 propiedad pública; diseñar y establecer su propia organización fiscal, los sistemas
16 y procedimientos de contabilidad para llevar a cabo sus transacciones financieras,
17 preparar, solicitar, administrar y fiscalizar su presupuesto; generar ingresos
18 propios y reprogramar sus fondos o economías de acuerdo a las prioridades de las
19 funciones que realiza; entre otros asuntos.

20 Con el propósito de promover la independencia administrativa,
21 presupuestaria y fiscal, que es indispensable para lograr la autonomía fiscal, la
22 Procuraduría de la Ciudadanía estará excluida de la aplicación de la Ley Núm. 230

de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, de la “Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, de la Ley 73-2019, según enmendada conocida como: “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico” y de los Reglamentos y Cartas Circulares del Departamento de Hacienda que actualmente le aplican a la Oficina del Procurador del Ciudadano, en sus procedimientos contables, financieros, administrativos y de la propiedad.

La Oficina someterá directamente a la Asamblea Legislativa su propia petición de recursos y gastos ordinarios de funcionamiento en o antes del 30 de junio del año fiscal anterior al que la solicite. La Asamblea Legislativa revisará la petición presentada por la Oficina a estos efectos y podrá acoger o modificar la misma.

El(La) Procurador(a) será el funcionario encargado de custodiar y contabilizar toda la propiedad y fondos públicos que le asigne la Asamblea Legislativa para su uso. Su jurisdicción sobre las cuentas, comprobantes, expedientes y demás documentos y transacciones fiscales, será exclusiva. La Oficina adoptará las normas, procedimientos, reglas, reglamentos, y las acciones administrativas que

sean convenientes y necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de este Artículo.

ARTÍCULO 32. INFORME ANUAL

La Oficina presentará un Informe Anual escrito, y cualesquiera informes especiales, a la Asamblea Legislativa y a el(la) Gobernador(a), sobre sus actividades; operaciones, logros y situación fiscal, junto con las recomendaciones que estime necesarias para la continua y eficaz protección de los derechos de los ciudadanos. La Oficina incluirá, al final de sus Informes Anuales, un resumen de las recomendaciones que ha hecho anteriormente y una descripción de la acción tomada sobre dichas recomendaciones. La Oficina publicará sus informes después de notificados a la Asamblea Legislativa, y a el(la) Gobernador(a), así como también podrá publicar los estudios y monografías que le sometan sus consultores(as) y asesores(as).

XI PENALIDADES

ARTÍCULO 33. SANCIONES PENALES

Cualquier persona que voluntariamente desobedezca, impida o entorpezca el desempeño de las funciones de la Oficina o de cualquiera de sus empleados(as) o funcionarios(as) autorizados(as) en el cumplimiento de sus deberes conforme a con esta Ley, o que obstruya la celebración de una Audiencia que se lleve a cabo de acuerdo la presente, con esta Ley, incurrirá en delito menos grave y será sancionada con multa que no excederá de cinco mil (\$5,000.00) dólares o con pena

1 de reclusión que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del
2 Tribunal.

3 Sin el consentimiento de el(la) Procurador(a) no se hará pública ninguna
4 evidencia o testimonio ofrecido en una vista o reunión. Cualquier persona que
5 violare esta disposición será sancionada con multa que no excederá de quinientos
6 (\$500.00) dólares o con pena de reclusión por un término que no excederá de seis
7 (6) meses o ambas penas, a discreción del Tribunal.

8 XII DISPOSICIONES GENERALES

9 ARTÍCULO 34. TRANSFERENCIA DE FONDOS Y PROPIEDAD

10 Se transfieren a la Oficina los recursos, programas y facilidades, incluyendo
11 récords, equipo y propiedad, fondos y asignaciones de cualquier naturaleza que
12 estén siendo utilizadas por la Oficina del Procurador del Ciudadano y el personal
13 que actualmente lleva a cabo las funciones en esta, para ser utilizados por la
14 Procuraduría de la Ciudadanía a los fines de cumplir con las disposiciones de esta
15 Ley.

16 El personal así transferido conservará todos los derechos adquiridos al
17 amparo de las leyes y reglamentos de personal vigentes, así como los derechos,
18 privilegios, obligaciones y status respecto a cualquier sistema existente de pensión,
19 retiro o fondo de ahorro y préstamo a los cuales estuvieren acogidos al aprobarse
20 esta ley.

21 Se dispone que toda querella, procedimiento o asunto pendiente ante la
22 Oficina del Procurador del Ciudadano o ante cualquier Agencia o Tribunal a la

1 fecha de aprobación de esta Ley, y que se haya iniciado conforme a las
2 disposiciones de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, se
3 continuará tramitando por la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía hasta
4 que recaiga una determinación final de acuerdo con las leyes y reglamentos en
5 vigor a la fecha en que estas querellas, procedimientos o asuntos se hayan iniciado.

6 ARTÍCULO 35. MEDIDA TRANSITORIA

7 Ninguna disposición de esta Ley se entenderá como que modifica, altera o
8 invalida cualquier acuerdo, convenio, reclamación o contrato que esté vigente al
9 entrar en vigor esta Ley y que haya sido otorgado por los (las) funcionarios(as)
10 responsables de implantar la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según
11 enmendada.

12 Todos los Reglamentos, Cartas Circulares y/o Órdenes Administrativas
13 que rigen la operación y procedimientos para llevar a cabo las funciones de la Ley
14 Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, que estén vigentes al entrar
15 en vigor esta Ley y que no estén en conflicto con la presente, continuarán
16 aplicándose hasta tanto sean enmendados o derogados por el(la) Procurador(a)
17 conforme a lo dispuesto en esta Ley.

18 El(La) Procurador(a) podrá utilizar todos los documentos, sellos, papeles y
19 materiales de oficina que tengan el nombre de la Ley que por la presente se deroga,

1 hasta que agote los mismos y pueda hacer los cambios correspondientes en cuanto
2 al nuevo nombre de la Oficina.

3 La Asamblea Legislativa podrá adoptar aquellas medidas transitorias y
4 tomar las decisiones que fueren necesarias a fin de que se efectúen las
5 transferencias ordenadas en esta Ley, sin que se interrumpan los procesos
6 administrativos, la prestación de servicios y las funciones transferidas de las
7 actividades administrativas.

8 ARTÍCULO 36. PRESUPUESTO GENERAL

9 Para el próximo año y en años subsiguientes, los fondos necesarios para
10 llevar cabo los propósitos de esta Ley serán consignados en el Presupuesto General
11 de Gastos del Gobierno. Hasta tanto no comience la vigencia del nuevo
12 Presupuesto, la Oficina continuará utilizando los fondos de la Oficina del
13 Procurador del Ciudadano asignados en el Presupuesto General vigente.

14 ARTÍCULO 37. INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA

15 Toda carta o correspondencia de cualquier clase dirigida a el(la)
16 Procurador(a) por una persona que esté bajo custodia de alguna Agencia o
17 institución gubernamental, deberá ser remitida inmediatamente a este(a), sin abrir.

18 Toda persona que violare lo dispuesto en este artículo incurrirá en delito
19 menos grave, y convicto(a) que fuere, será castigado(a) con una multa no mayor

1 de quinientos (\$500.00) dólares, o con reclusión por un término no mayor de seis
2 (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal.

3 ARTÍCULO 38. REITERACIÓN DEL CARGO DE PROCURADOR(A)

4 El(La) Procurador(a) nombrado(a) como tal durante la vigencia de la Ley
5 Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, continuará en su puesto y en
6 la dirección de la Oficina de el(la) Procuraduría de la Ciudadanía con todas las
7 facultades, responsabilidades y funciones que esta Ley le otorga al puesto de él (la)
8 Procurador(a) de la Ciudadanía, hasta culminar el término de tiempo para el cual
9 fue nombrado.

10 ARTÍCULO 39. INMUNIDAD

11 El(la) Procurador(a) disfrutará de inmunidad en lo que a responsabilidad
12 civil o criminal se refiere, por las actuaciones, resoluciones y recomendaciones
13 emitidas, como resultado de cualquier investigación realizada, en cumplimiento
14 de las disposiciones de esta Ley. Esta inmunidad será extendida a los(as)
15 empleados(as) y funcionarios(as) de la Oficina en el desempeño de sus funciones
16 oficiales.

17 ARTÍCULO 40. TÉRMINO PARA LA ADOPCIÓN DE REGLAMENTOS

18 La Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía derogará, modificará o
19 adoptará los reglamentos necesarios para la implantación de esta Ley en 180 días
20 a partir de la aprobación de esta. Hasta que no se adopten los nuevos reglamentos

continuarán en vigor los existentes y los procedimientos de la Oficina se registrarán por estos, siempre y cuando no sean contrarios a las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 41. LEYES APLICABLES A LA OFICINA:

Las Leyes Núm. 454-2000, 111-2005, 75-2017, 207-2018 y 97-2008, aprobadas con posterioridad a la aprobación y vigencia de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, regulando y/o otorgando jurisdicción sobre algún asunto o área en particular de la gestión pública, y que hayan delegado en la Oficina del Procurador del Ciudadano, la facultad, responsabilidad y el deber de procurar su cumplimiento; continuarán en toda su fuerza y vigor, ahora, bajo las responsabilidades de el(la) Procurador(a) de la Ciudadanía y de su Oficina que por esta Ley se crea.

ARTÍCULO 42. CLAUSULA DE SEPARABILIDAD

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará el resto de esta Ley; y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo, o parte declarada inconstitucional.

ARTÍCULO 43. DEROGACIÓN

Se deroga la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada conocida como: "Ley del Procurador del Ciudadano" y cualquier otra ley o disposición reglamentaria que esté en conflicto con las disposiciones de esta Ley. Esta derogación no afectará la creación de la Oficina de la Procuraduría de la Ciudadanía, los nombramientos de los empleados, los derechos y privilegios

1 adquiridos por éstos, los contratos, los convenios y acuerdos hechos al amparo de
2 ésta. Esta derogación no afectará los procedimientos instados o que puedan
3 instarse al amparo de las disposiciones de la citada Ley.

4 ARTÍCULO 44. VIGENCIA

5 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.